

Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En estos autos RIT O-241-2023, RUC 2340505733-6, del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, por sentencia de diez de octubre de dos mil veintitrés, se dio lugar a la demanda por despido indirecto y nulo, y cobro de prestaciones, presentada por un grupo de trabajadores contra la empresa Industria Maderera Entre Ríos S. A.

La demandada interpuso recurso de nulidad que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Talca, mediante sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

En contra de este fallo, la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en una o más sentencias firmes emanadas de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe contener fundamentos plausibles, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos ejecutoriados que se invocan como criterios de referencia.

**Segundo:** Que la materia de derecho propuesta consiste en determinar “*el correcto sentido y alcance del instituto jurídico denominado ‘admisión tácita de los hechos contenidos en la demanda’ establecido en el inciso 7 del N°1 del artículo 453 del Código del Trabajo, en particular la procedencia o improcedencia de prescindir de la etapa de prueba*”.

Para la recurrente, el artículo 453 número 1 inciso séptimo del Código del Trabajo, contiene una facultad entregada a la judicatura consistente en tener por admitidos los hechos de la demanda en la sentencia definitiva; sin embargo, en caso alguno permite prescindir de la prueba que interesa rendir a las partes, trámite procedente en todo caso, excepto si la demandada se allana, supuesto reglado en su artículo 453 número 3, conclusión que cree coherente con una interpretación armónica y restrictiva de las normas sancionatorias, por lo que es contrario a derecho afirmar la extensión de aquella disposición a casos no previstos expresamente en la legislación.

Por lo anterior, plantea que el demandante siempre debe probar su pretensión en la etapa procesal correspondiente, porque el silencio del sujeto pasivo importa una negación de los hechos, controvirtiendo de esta forma los



alegados en la acción, carácter que sólo al final de la instancia podrá verse alterada si la judicatura decide ejercer la facultad prevista en dicha norma.

En consecuencia, frente a la rebeldía del demandado, el trámite siguiente será el de recepción de la causa a prueba, porque el reconocimiento ficto de los hechos se debe declarar en la resolución de la *litis* y no en la audiencia preparatoria, teniendo para ello en consideración que esta etapa garantiza el derecho a defensa como elemento fundamental del debido proceso, cuya omisión importa su contravención, que no cede ante la celeridad que se pretenda dar al juicio.

**Tercero:** Que, para resolver, la judicatura tuvo en consideración que la demandada, a pesar de encontrarse debidamente notificada, no compareció a la audiencia preparatoria, por lo que tuvo por contestada la demanda para todos los efectos legales por verificarse los supuestos contenidos en el artículo 452 del Código del Trabajo, entendiendo precluido su derecho a pronunciarse sobre los hechos afirmados por la contraria, especialmente el de negarlos en forma expresa y concreta debido a su rebeldía; por lo anterior y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 453 número 1 inciso séptimo, concluyó que resultaba innecesario recibir la causa a prueba por no existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, de acuerdo, además, con los principios de impulso procesal de oficio y celeridad, y lo dispuesto en el número 3 inciso segundo de la citada disposición, en relación con el artículo 457.

De esta forma, la sentencia dio por acreditados los hechos de la demanda, en especial, la existencia de la relación laboral y los incumplimientos imputados a la demandada que motivaron la decisión de los trabajadores de autodespedirse, invocando para tal efecto la causal prevista en el artículo 160 número 7 del mencionado código.

**Cuarto:** Que la Corte de Apelaciones de Talca, conociendo el respectivo recurso de nulidad deducido por la demandada, fundado en la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo por infracción a su artículo 453 número 1 inciso séptimo, en relación con los artículos 19 del Código Civil y 19 número 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República; sostuvo que la primera disposición citada contiene un caso de admisión tácita de los hechos que, en lo sustancial, libera a la parte que favorece de la carga de probar los que son fundamento de su pretensión, por lo que la ausencia de controversia permite dictar la respectiva sentencia de inmediato, supuestos que concurren, porque la contestación de la demanda no fue oportuna, omisión que permitió a la judicatura fallar, sin vislumbrar, por tanto, una infracción a las citadas normas y al debido proceso.



**Quinto:** Que, para confrontar la sentencia impugnada, la demandada acompañó las pronunciadas por las Cortes de Apelaciones de Concepción y de Santiago, en los autos Rol N°487-2019 de 19 de febrero de 2020, y 2.393-2017 de 20 de abril de 2018, respectivamente.

En el primer dictamen se consideró que *“en la causa en revisión, se dedujo una demanda por despido indirecto, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales, demanda que no fue contestada en la oportunidad legal, verificándose con fecha 29 de mayo de 2019 audiencia preparatoria en rebeldía de la parte demandada, audiencia en la cual el Juez, tras dar por frustrado el trámite de la conciliación, procedió inmediatamente a aseverar y resolver que ‘En mérito de lo dispuesto en el artículo 453 N°1, inciso 7 del código del trabajo, se tienen por tácitamente admitidos los hechos contenidos en la demandada, no se recibe la causa a prueba, y se procede a dictar sentencia inmediata’”,* agregando, a continuación, *“que, como se puede apreciar, el Juez recurrido, atendida la omisión del demandado en cuanto a contestar la demanda, procedió a ejercer la facultad establecida en el artículo 453 N°1, inciso 7 del Código Laboral, y ello antes de determinar la existencia o no de hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, es decir, antes de agotar la fase de prueba, infringiendo con ello el tenor literal de la norma precitada, que establece perentoriamente que es al tiempo de dictar la sentencia definitiva, cuando el sentenciador puede dar como tácitamente admitidos los hechos contenidos en la demanda, producto de la ausencia de contestación de demanda”, “tal vulneración no resulta ser baladí, pues aun cuando no hubiésemos contado con texto expreso, la mera lógica conduce a concluir que sólo una vez que se ha establecido aquello que se debe probar y aquello que no, podrá el juez en su sentencia aplicar la antedicha facultad, justamente para dar por acreditado aquello que reclamaba prueba”, “en efecto, la sola circunstancia de no contestar oportunamente la demanda, no tiene como consecuencia ni el acogimiento de la misma, ni la liberación de la carga probatoria respecto de quien corresponda, sino sólo el que indica la norma citada, esto es, la posibilidad de que se den por probados uno o más hechos expuestos en el libelo pretensor y ello conforme al criterio del sentenciador, quien por cierto deberá obrar en el marco de las reglas de la sana crítica, marco en el cual el juez decidirá si ejerce o no tal prerrogativa, siendo perfectamente posible que aun ejerciéndola respecto de uno, varios o la integridad de tales hechos, concluya que la demanda igualmente deberá ser desechada”;* concluyendo, por lo expuesto, que *“al entender el juez recurrido que la norma en comento lo liberaba de la obligación de estudiar la pertinencia de recibir la causa a prueba, al usar prematuramente la atribución contemplada el artículo 453 N°1, inciso 7 del Código del Trabajo, y el ejercerla en*



*el periodo de prueba y no en la fase resolutive, conduce a estos sentenciadores a la necesaria aplicación del artículo 429, inciso segundo, del mismo Código, debiendo esta Corte, de oficio, proceder a decretar la nulidad de oficio, de todo lo obrado en el proceso”.*

*En el segundo fallo se estimó que “en el caso que nos ocupa, por no haberse contestado la demanda, la jueza a quo, en la audiencia preparatoria, tuvo por tácitamente admitidos los hechos alegados en la demanda y, como consecuencia de ello, declaró que no existían hechos discutidos y, por tanto, al no haber necesidad de prueba, dictó sentencia de inmediato. Pero con ese proceder, alteró la ritualidad del juicio, toda vez que la circunstancia de no haberse contestado la demanda de estos autos, conllevaba a que debía recibirse la causa a prueba sobre los hechos en que la actora fundaba su pretensión y que eran de su carga demostrar, sin perjuicio, claro está, de la facultad otorgada al tribunal de tener –con posterioridad- por tácitamente admitidos alguno o todos de los hechos en que se apoyaba esa demanda. Pero esto último dice relación con el examen de la prueba y la opción que le asiste al tribunal, al dictar la sentencia definitiva, de hacer uso de la mencionada atribución respecto de una demandada que no respondió. Pero en ningún caso puede el juez asilarse en el hecho que no se contestó la demanda para tener, en la audiencia preparatoria, por tácitamente admitidos los supuestos fácticos de la demanda, liberando al actor de toda carga probatoria”, “claramente el hecho de no contestar la demanda no conlleva que no existan hechos sustanciales, pertinentes ni controvertidos, de manera que el juez no está en situación de poder dictar sentencia en la audiencia preparatoria. Mientras que la facultad que contempla el inciso sexto del numeral 1° del artículo 453 sólo puede ejercerse en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, tal como lo establece la misma norma. En este caso, la secuencia fue alterada, pues de manera anticipada –en la audiencia preparatoria- el tribunal asumió como tácitamente admitidos los hechos de la demanda por no haber sido ésta contestada, lo que devino en estimar que no existían hechos debatidos y, en consecuencia, dictó sentencia de inmediato”, agregando, por último, “que si bien en la audiencia preparatoria la parte demandada no compareció asistida por un abogado o por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, por lo que no pudo ofrecer prueba alguna, en la audiencia de juicio sí tenía la posibilidad de ejercer su derecho a defensa, refutando las probanzas que su contraparte hubiera presentado”, “en ese contexto, al actuar la jueza del modo en que lo hizo, ha infringido los preceptos legales mencionados, configurándose la causal invocada, lo que trae aparejado la nulidad del fallo y lo obrado en la audiencia preparatoria”.*



**Sexto:** Que, en consecuencia, al cotejar el fallo impugnado con los acompañados por la demandada, se desprende que concurre el supuesto de disparidad jurisprudencial que exigen los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, por lo que se debe determinar cuál de las doctrinas divergentes es la correcta.

**Séptimo:** Que, para decidir, se debe considerar que las reglas que rigen las audiencias preparatoria y de juicio se encuentran en los artículos 453 y 454 del Código del Trabajo.

El inciso séptimo del número 1 del artículo 453 dispone: *“cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos”*, agregando su inciso siguiente que *“si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la demanda sólo en la parte en que hubo oposición”*. El numeral tercero de la misma norma, en su inciso primero, establece que, *“contestada la demanda, sin que se haya opuesto reconvenición o excepciones dilatorias, o evacuado el traslado conferido de haberse interpuesto éstas, el tribunal recibirá de inmediato la causa a prueba, cuando ello fuere procedente, fijándose los hechos a ser probados”*, precisando en el inciso segundo que *“de no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal dará por concluida la audiencia y procederá a dictar sentencia”*.

**Octavo:** Que, de las disposiciones transcritas, se desprende que la referencia a la “sentencia definitiva” contenida en el inciso séptimo del numeral primero del citado artículo, no supone necesariamente un juicio controvertido con oferta, incorporación y valoración de prueba, porque es posible que se pronuncie en la misma audiencia preparatoria en caso de allanamiento expreso de la parte demandada, observándose que la misma regla se aplica si es tácito, pues su numeral tercero vincula directamente la contestación de la demanda con la recepción de la causa a prueba, por lo que, de no haberse evacuado tal trámite y no estimarlo necesario el tribunal, es posible que en dicha etapa se concluya la inexistencia de hechos controvertidos y, en consecuencia, se proceda en la forma prevista en el inciso segundo del numeral tercero del artículo 453 del Código del Trabajo, dándola por concluida, dictando sentencia a continuación.

**Noveno:** Que dicho razonamiento es coherente con la celeridad procesal reglada en el artículo 425 del referido código, sin que se advierta alguna contradicción con las exigencias y presupuestos de un justo y racional procedimiento, desde que la demandada fue oportunamente emplazada y contó con todas las posibilidades de defensa en la etapa correspondiente, advirtiéndose



que su inactividad la dejó sin una referencia fáctica y argumentación jurídica contrapuestas a las de los actores.

**Décimo:** Que esta Corte ya se pronunció sobre la materia propuesta en la sentencia dictada en los autos Rol N°8.070-2013, que analizó el sentido y alcance del artículo 453 número 1 inciso séptimo del Código del Trabajo, indicando que consagra la institución de carácter procesal que la doctrina denomina “admisión de hechos”, que puede ser expresa o tácita, correspondiendo la primera a un acto procesal por el cual una parte reconoce la verdad de los expuestos por la contraria y cuyo efecto consiste en que ésta queda relevada de probar los admitidos por la primera, por lo que resulta innecesaria cualquier forma de prueba, agregando que la segunda provoca idéntico efecto, aunque sólo cabe aplicarla en los casos que señala expresamente la ley, siendo uno el que contempla la norma citada.

En ese contexto, al liberar a la parte a quien favorece de la carga de acreditar los hechos que sirven de fundamento a su pretensión o reacción, se debe colegir que la institución procesal de la “admisión de hechos” juega un rol de relevo de prueba y no de inversión de la carga respectiva, lo que obsta a la discusión sobre los presupuestos fácticos en una fase probatoria posterior; y es en razón de lo anterior que la legislación introdujo en el artículo 453 número 3 inciso segundo del Código del Trabajo, que regula la audiencia preparatoria del procedimiento de aplicación general, la norma que prescribe: *“De no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal dará por concluida la audiencia y procederá a dictar sentencia”*.

Además, la citada sentencia tuvo presente que el Tribunal Constitucional, resolvió el 14 de mayo de 2009, en los autos N°1.384-2009, que *“el precepto que se cuestiona confiere al juez la facultad, si el demandado no concurriere a la audiencia preparatoria –cuyo es el caso-, de estimar tácitamente admitidos los hechos contenidos en la demanda. Si así ocurre, resulta lógico que no se reciba la causa a prueba, porque no existen hechos que deban ser probados;*

*Séptimo. Que este sistema procesal, cuya idoneidad ha calificado el legislador, aparece tan compatible con las reglas del debido proceso como puede serlo el que atribuye otros efectos jurídicos al silencio, estimando que hay controversia cuando nada dice el demandado. Aún más, puede entenderse que se vincula mayormente con el sentido natural de las cosas, manifestado en el aforismo el que calla, otorga;*

*Octavo. Que, en este contexto, la pretensión del requirente no aparece razonablemente fundada, máxime si tampoco se ha impugnado el precepto del que directamente emana la facultad del tribunal para concluir la audiencia y dictar*



*fallo – artículo 453, N° 3- , y que exige sea ‘contestada la demanda’ para recibir la causa a prueba”.*

Por tales razones se concluyó que, si la demandada no contesta la demanda, no existe controversia sobre los hechos propuestos en ella, antecedente suficiente que autoriza a la judicatura de la instancia a dar por concluida la audiencia preparatoria y dictar la sentencia definitiva correspondiente.

**Undécimo:** Que, por otra parte, examinada la historia de la Ley N°20.087, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, se advierte que uno de los elementos destacados en el mensaje consistía en la necesidad de contar con procedimientos *“que se caractericen por la celeridad, la inmediatez y la concentración”*, pues el sistema entonces vigente presentaba una *“excesiva tardanza en la tramitación de los procesos laborales”*, que implicaba que *“los demandantes de justicia laboral deben postergar sus expectativas de solución jurisdiccional, debido a lo extenso de los procesos y a las dificultades para ejercer patrimonialmente los derechos declarados en juicio”*.

Luego, al describir el contenido del proyecto y referirse al planteamiento controvertido, se indicó que *“es de resaltar la obligación para el demandado de aceptar o negar en su contestación oral, en forma expresa y concreta cada uno de los hechos que sirven de fundamento a la demanda, bajo sanción de que el juez pueda estimarlos como tácitamente admitidos”*, lo que en el proyecto original se consagraba en el artículo 455 propuesto, que señalaba *“Cuando el demandado no concurriera a la audiencia, o de hacerlo no negare en su contestación algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos”*, agregando una regla idéntica a la actual acerca del allanamiento expreso, lo que finalmente fue incorporado en el artículo 453 del texto aprobado, tras desechar una propuesta de eliminación formulada durante su discusión, que cuestionaba *“la conveniencia de esta facultad y su procedencia a la luz de la teoría general de la prueba y de los efectos del silencio circunstanciado”*.

**Duodécimo:** Que, por consiguiente, de acuerdo a la necesaria celeridad que guía al actual procedimiento laboral y el tenor literal del artículo 453 del Código del Trabajo, se unifica la jurisprudencia en el sentido de precisar que la facultad consagrada en el inciso séptimo de su numeral tercero, en orden a estimar como tácitamente admitidos los hechos que no han sido negados por el demandado, porque no contestó la demanda o habiéndolo hecho sólo controvertió algunos de los afirmados por la contraria, puede ser ejercida por la judicatura, lo que puede ocurrir en la audiencia preparatoria, etapa en que se traducirá en la omisión de la recepción de la causa a prueba, o más tarde, luego de ponderar los



medios de convicción rendidos, sirviendo como complemento de los incorporados al juicio, según las circunstancias del caso.

**Decimotercero:** Que, en estas condiciones, no yerra la Corte de Apelaciones de Talca al rechazar el recurso de nulidad promovido por la demandada y sostener que la judicatura no conculcó las normas que cita al omitir la recepción de la causa a prueba considerando la falta de contestación de la demanda y, en consecuencia, de controversia expresa sobre los hechos en que se sustenta la acción.

Por estas consideraciones y disposiciones citadas, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada contra la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°10.894-2024.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y las abogadas integrantes señoras Fabiola Lathrop G., e Irene Rojas M. Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.





En Santiago, a veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

